

RELATORÍA JURÍDICA

Este es un producto de comunicación del Procedimiento “Difusión de Información Jurídica”, el cual se encarga de compilar las novedades a través del monitoreo permanente a las altas cortes, entidades nacionales y organismos de control.

La información publicada no compromete la posición institucional de la Alcaldía de Santiago de Cali y su objetivo es meramente de actualización jurídica, para los abogados y servidores públicos de la entidad.

Martes 1- Enero – 2013

Procedencia de la reducción de la condena por participación de la víctima en la generación del daño

Sobre el tema de la concausa, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido que el comportamiento de la víctima que habilita al juzgador para reducir el cuántum indemnizatorio es aquel que contribuye, de manera cierta y eficaz, en la producción del hecho dañino, es decir, es el que se da cuando la conducta de la persona agraviada participa en el desenlace del resultado, habida consideración de que contribuyó realmente a la causación de su propio daño.

En esa medida, la reducción del daño resarcible, con fundamento en el concurso del hecho de la víctima, responde a una razón de ser específica: la víctima contribuyó realmente a la causación de su propio daño, caso en el cual esa parte del perjuicio no deviene antijurídico y, por ende, no tiene la virtud de imputarse al patrimonio de quien se califica responsable.

Consejo de Estado SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera Actor: Yamileth Patricia Torres y otros, contra el Municipio de Cali Bogotá, D.C., Julio 11 de 2012 Radicación No.: 76001-23-31-000-1999-00096-01(24445)

Los ingresos que generan el pos y el plan complementario de salud no están sujetos al impuesto de industria y comercio

Tanto los ingresos recibidos por la prestación de los servicios prestados del Plan Obligatorio de Salud, introducidos por la Ley 100 de 1993, como los obtenidos por la prestación de servicios complementarios al mismo, y que también hacen parte del servicio público de salud, no están sujetos al Impuesto de Industria y Comercio por su naturaleza de "servicios" y por no entrar en la clasificación de actividades industriales y comerciales. Además, tampoco resulta de recibo que la parte demandada haya gravado los ingresos percibidos por servicios de salud, con el argumento de que la parte actora no llevó contabilidad separada de sus ingresos, pues esta obligación sólo se predica de las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud (EPS).

Consejo de Estado SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA Consejero Ponente: William Giraldo Giraldo Actor:
Centro Médico Imbanaco de Cali S.A., contra el Municipio de Santiago
de Cali Bogotá D.C., Agosto 30 de 2012 Radicación No.: 76001-23-
31-000-2008-01212-01(18656)

La carrera administrativa no constituye impedimento para la supresión de empleos (8:00 a.m.)

Al configurarse falsa motivación, el Consejo de Estado decretó la nulidad del acto de supresión del cargo de un empleado de carrera. En el proceso, se comprobó que personal temporal desempeñaba el mismo empleo, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, para la fecha en la que se suprimió el cargo. La corporación advirtió que si bien el nominador tiene la potestad de seleccionar quiénes ocupan las vacantes, no puede olvidarse que estas deben ser suplidas por empleados con mejor derecho, como el que ostentan los funcionarios de carrera, so pena de vulnerar su derecho de preferencia.

Así mismo, la Sección Segunda recordó que ni la carrera administrativa ni ningún otro régimen de administración de personal que brinde garantías a quienes se hallen inscritos o escalafonados constituye impedimento para que el Gobierno Nacional, departamental, municipal o distrital lleve a cabo, dentro de los parámetros constitucionales y legales, la supresión de empleos en las entidades que sean de su competencia (C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez). (Consejo de Estado Sección Segunda, Sentencia 05001233100019980028501(077811), 8/8/2012) Noticia generada en Dic. 31/12 (8:00 a.m.)

Se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la constitución política en relación con el fuero militar

En ningún caso la Justicia Penal Militar o policial conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública, salvo los delitos anteriores, serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales. Congreso de la República Diciembre 27 de 2012 Acto Legislativo No. 02

Las entidades territoriales y las EPS del régimen subsidiado les darán a las IPS de salud indígenas tratamiento de ESE

Mediante el Decreto 4972 de 2007 "por el cual se reglamentan las instituciones prestadoras de servicios", se define en su artículo 1, que en el marco de lo previsto en el literal f) del artículo 14 de la Ley. 1122 de 2007, entre otras disposiciones sobre la contratación de servicios de salud, las entidades territoriales y las entidades promotoras de salud del régimen subsidiado les darán a las instituciones prestadoras de servicios de salud indígenas (IPSI) tratamiento de Empresas Sociales del Estado.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Octubre 26 de 2012
Concepto jurídico N° 80041

Se establece el auxilio de transporte para el año 2013

Se fija a partir del primero (1°) de enero de dos mil trece (2013), el auxilio de transporte a que tienen derecho los servidores públicos y los trabajadores particulares que devenguen hasta dos (2) veces el salario mínimo legal mensual vigente, en la suma de setenta mil quinientos pesos (\$70.500.00) moneda corriente, mensuales el cual se pagará por los empleadores en todos los lugares del país donde se preste el servicio público de transporte.

MINISTERIO DEL TRABAJO Diciembre 28 de 2012 Decreto No. 2739

Contratos celebrados entre entes territoriales y ESPD se rigen por el estatuto de contratación estatal

Los contratos celebrados entre entes territoriales y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios (de cualquier orden y sin excepción), deben regirse para todos los efectos por el Estatuto General de la Contratación Pública, razón por la cual no podría pretenderse que organizada una empresa por parte del municipio, se haga una entrega directa de la infraestructura municipal a dicha empresa.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Septiembre 24 de 2012 Concepto Jurídico No. 639

Miércoles 2- Enero – 2013

Presupuesto para que una entidad pública pueda repetir en contra de un servidor público, ex servidor público o particular que ejerza función pública

Para que una entidad pública pueda repetir en contra de un servidor público, ex servidor público o particular que ejerza función pública, deben concurrir los siguientes elementos: a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar los daños antijurídicos causados a las personas; b) Que la entidad haya pagado a la víctima del daño la suma determinada en la sentencia condenatoria; y c) Que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones públicas.

Consejo de Estado SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón
Actor: Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., contra Álvaro Villegas Villegas Bogotá, D.C., Noviembre 28 de 2012 Radicación: 25000-23-26-000-2000-00147-01 (35530)

La configuración de la falla del servicio no siempre genera responsabilidad de la administración

Es perfectamente posible que exista una falla del servicio de una entidad pública sin que la misma genere responsabilidad de la organización estatal; lo anterior, toda vez que es requisito sine qua non que se haya demostrado y constatado que ese comportamiento irregular de la administración –activo u omisivo– fue el factor determinante en la producción del daño antijurídico (imputatio facti).

Consejo de Estado SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA Consejero Ponente: Enrique Gil Botero Actor: Enrique Durango Sanin y otros, contra el INCORA Bogotá D.C.,

Las entidades públicas deben aportar a los procesos administrativos los actos administrativos que se les soliciten

De acuerdo con el principio de la bona fide, cuando se solicita a una entidad pública que aporte a un proceso un determinado acto administrativo, se tiene la confianza legítima que lo allegará conforme a las exigencias normativas y, por lo tanto, debe tenerse como un documento auténtico porque se espera de la Administración que aporte copias fidedignas respecto de sus originales.

Consejo de Estado. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA Consejero Ponente: Enrique Gil Botero Actor: Municipios Asociados del Valle de Aburrá -MASA- , contra la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. - Tren Metropolitano-Bogotá, D.C., Agosto 8 de 2012 Radicación: 05001-23-24-000-1991-06230-01(20346)

Procuraduría defiende constitucionalidad de expresión "comunidades negras" (3:09 p.m.)

La Procuraduría concluyó que la expresión "comunidades negras" a la que aluden varias normas que reconocen el derecho de la propiedad colectiva de terrenos ribereños de ríos de la cuenca del pacífico a una serie de comunidades afrocolombianas no es peyorativa ni discriminatoria y, por tanto, le solicitó a la Corte Constitucional declarar exequibles varios apartes de las leyes 70 de 1993 y 649 del 2001 y de los decretos 1332 de 1992 y 2374 de 1993.

El Ministerio Público recordó que estas disposiciones surgieron por mandato del artículo 55 transitorio de la Constitución y que es ese mismo ordenamiento el que alude a la expresión objeto del reparo. Para la Procuraduría, ni estas leyes ni el texto superior tratan de sugerir una discriminación racial o generar desigualdad social. (Procuraduría General de la Nación, Concepto 5479, 11/14/2012)

Ingresos que reciben las clínicas y hospitales por la prestación de servicios pos no están sujetos al impuesto de industria y comercio

Los servicios POS son una parte del servicio público de salud, que corresponde a la atención básica que el Estado puede garantizar, sin embargo, existen otros servicios que complementan al POS y que también hacen parte del servicio público de salud y, por tanto, los

ingresos que reciben las clínicas y hospitales,- por la prestación de esa clase de servicios no están sujetos al impuesto de industria y comercio pues mantienen la naturaleza de servicios y no podrían clasificarse como actividades industriales o comerciales, para poder ser gravados.

Consejo de Estado SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA Consejera Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia Actor: Cedimed S.A., contra el Municipio de Medellín Bogotá, D.C., Octubre 11 de 2012 Radicación: 0500 1-23-31-000-2009-00195-01 [18615]

En el concurso de méritos las listas de elegibles una vez en firme son inmodificables

Las listas de elegibles, una vez en firme, son inmodificables, en virtud del principio constitucional de buena fe y de la confianza legítima que ampara a quienes participan en estos procesos, constitutivos de actos administrativos que crean derechos subjetivos de carácter particular y concreto, los cuales no pueden ser desconocidos.

Corte Constitucional Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla Actor: Lucy Daniela Mantilla Pardo Bogotá, D. C., Agosto 27 de 2012 Sentencia T-682/12

El empleado que se encuentre en licencia por enfermedad no tiene derecho a percibir el subsidio de alimentación ni el auxilio de transporte

El auxilio de alimentación consiste en el pago en dinero de una suma determinada anualmente por el Gobierno Nacional a aquellos empleados regidos por el Decreto 1042 de 1978, que no superen un monto específico de su asignación básica mensual.

El auxilio de transporte tiene por finalidad subsidiar los gastos que ocasiona el transporte desde su residencia al sitio de trabajo y de éste nuevamente a la residencia del empleado. Con fundamento en lo anterior, el empleado que se encuentre en licencia por enfermedad, no tendrá derecho a percibir el subsidio de alimentación, ni el auxilio de transporte.

Departamento Administrativo de la Función Pública Abril 23 de 2012
Concepto Jurídico No. 61351

Prohibición de apelar decisiones de representantes y jefes superiores de entes territoriales es exequible: Procuraduría

2 de Enero 9:39 AM

La norma que prohíbe apelar las decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial no vulnera la Constitución.

Así lo indicó el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, al solicitar a la Corte Constitucional que declare exequible el artículo 74 de la Ley 1437 del 2011, por medio de la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El jefe del Ministerio Público precisó que la Constitución le reconoce al legislador un amplio margen de configuración para regular las formas cada proceso administrativo y judicial, siempre y cuando obre conforme a los valores, principios y derechos reconocidos por la Carta.

Según Ordóñez, la norma es acorde con el principio que señala que el superior jerárquico o funcional de quien dicta el acto debe decidir el recurso de apelación. Como los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial no tienen superior jerárquico o funcional, sus decisiones son inapelables.

Además, explicó que el principio constitucional de autonomía territorial, en armonía con el principio de república unitaria, implica que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites previstos por la Carta y la ley y con observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad con las autoridades nacionales.

“No es razonable asumir, como lo hacen los actores, que los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial tengan un superior jerárquico o funcional, ante el cual pueda tramitarse el recurso de apelación. Pensar que el Presidente de la República o el gobernador de cada departamento, ostentan tal condición es, por decirlo menos, desafortunado”, concluyó el Procurador.

Jueves 3 – Enero – 2013

Línea jurisprudencial del Consejo de Estado respecto al reconocimiento de perjuicios morales

La Corporación reitera “su precedente horizontal y, por lo tanto, la línea jurisprudencial sobre la materia, según la cual los perjuicios morales dada su connotación de inconmensurables no pueden ser sometidos a reglas, procedimientos o instrumentos de objetivización, ya que están encaminados a compensar –no indemnizar– bienes

jurídicos de contenido personalísimo –subjetivos– y, por ende, no pueden ser sometidos a una ponderación, ya que no existen derechos en conflicto o tensión”. Así se pronunció la Sala al analizar el reconocimiento de perjuicios morales a familiares de ciudadano que falleció en enfrentamiento entre paramilitares y Policía Nacional.

Para el Alto Tribunal “la exigencia de razonabilidad y racionalidad en la valoración y tasación del perjuicio moral no es incompatible con el arbitrio judicial. Por el contrario, el arbitrio iudicis en aras de no caer en la arbitrariedad, exige del operador judicial una carga mínima de argumentación a través de la cual, previo el análisis del caso concreto y de las condiciones particulares de las víctimas, se determine la aplicación del precedente a partir de las subreglas que esta Sección ha delimitado, según las cuales en casos de muerte o lesiones, el dolor moral se presume, mientras que para otro tipo de afectaciones es necesario acreditar su existencia o configuración”. Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2012-N23380 (01592-01) Sentencia 2012/08/08

Consejo de Estado unifica criterios en proceso de selección para revisión de acciones populares y de grupo

La Corporación indicó que “en cuanto al propósito de la labor de unificación de jurisprudencia que debe procurarse a través de la operatividad del mecanismo de revisión eventual en materia de acciones populares, en el auto del 14 de julio de 2009 (AG-00244-01), la Sala Plena, a título enunciativo, identificó algunos eventos en los cuales podría estar llamada a ser atendida la solicitud de revisión eventual respectiva, como por ejemplo (i) cuando uno o varios de los temas contenidos en la providencia respectiva hubiere merecido tratamiento diverso por la jurisprudencia del Consejo de Estado; (ii) cuando uno o varios de los temas de la providencia, por su complejidad, por su indeterminación, por la ausencia de claridad de las disposiciones normativas en las que se funda o por un vacío en la legislación, sean susceptibles de confusión o involucren disposiciones respecto de las cuales quepan diferentes formas de aplicación o interpretación; (iii) cuando sobre uno o varios de los temas de la providencia no hubiere una posición consolidada por parte de la jurisprudencia de esta Corporación o (iv) cuando uno o varios de los temas de la providencia no hubiere(n) sido objeto de desarrollos jurisprudenciales, por parte del Consejo de Estado”. Consejo de Estado CE-SP-EXP2012-N00205-01 AP- 2012/09/11

Se reglamenta el parágrafo 1 del art. 61 de la ley 388 de 1997 relativo al anuncio de programas, proyectos u obras de utilidad pública o interés social

Las entidades competentes para adquirir por enajenación voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles para la ejecución de proyectos u obras de utilidad pública o interés social, harán el anuncio del respectivo programa, proyecto u obra, mediante acto administrativo de carácter general que deberá publicarse en los términos del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Diciembre 27 de 2012 Decreto No. 2729

Genera responsabilidad contractual del Estado la omisión del deber de información en la etapa precontractual

Dentro de los deberes que impone la buena fe contractual está el de brindar información a la otra parte porque el contrato es un instrumento que permite la satisfacción de los intereses de cada uno de los contratantes y por ello hoy en día también se habla de un “deber de cooperación” o de solidaridad contractual que se resume en la idea de que cada contratante debe tener en cuenta y respetar el legítimo interés de su co-contratante lo que se acaba de expresar se realza y adquiere mayor entidad en los terrenos de la contratación estatal.

En efecto, tales casos son: a) Cuando la información es determinante para la expresión del designio negocial de la otra parte, de tal suerte que de haber conocido o sabido no habría contratado o lo hubiera hecho en condiciones diferentes; b) Cuando una parte le pide una determinada información a la otra; c) Cuando una parte se decide a informar y comunica esta decisión; y d) Cuando hay específicas relaciones de confianza entre las partes. Para que se configure el incumplimiento del deber precontractual de informar es necesario que concurren estos tres requisitos: a) El desconocimiento de una información por una de las partes siempre y cuando que ésta no la haya podido conocer por sí misma con normal diligencia o que ese saber requiera de especiales conocimientos de lo propio que el titular no tiene y que no debe tener en razón de su profesión u oficio; b) La otra parte conoce, o debe conocer, la información que aquella desconoce y, por mandato legal, o por ser determinante para la otra, o porque se le ha pedido o porque se ha decidido a informar o hay específicas relaciones de confianza entre ellas, tiene el deber de informar; y c) La parte que tiene la información no se la brinda a quien la desconoce.

Los vehículos denominados cuatrimotos para el uso particular no requieren del registro nacional automotor

De conformidad con las disposiciones del Código Nacional de Tránsito, en nuestro país se registran o matriculan los vehículos que circulan por las vías públicas y privadas que estén abiertas al público, siempre y cuando estos sean aptos de acuerdo con la homologación del país fabricante para transitar por las carreteras nacionales, departamentales y municipales, los manuales expedidos en el país de origen.

Los vehículos denominados cuatrimotos son para el uso particular y no están diseñados para el uso en las vías públicas, razón por la cual no requiere del registro establecido en el art. 46 del Código Nacional de Tránsito. MINISTERIO DE TRANSPORTE Agosto 13 de 2012 Concepto Jurídico No. 1340415331

Se fijan los criterios para la fijación de tarifas diferenciales, segmentadas o subsidiadas en los sistemas masivos, integrados o estratégicos de transporte de pasajeros

Las autoridades Distritales o Municipales podrán fijar tarifas diferenciales, segmentadas o subsidiadas, en los Sistemas de Transporte de pasajeros Masivo, Integrado o Estratégico, para lo cual deberán previamente elaborar un modelo económico, financiero y operativo, en el que se demuestre que la aplicación de las tarifas garantiza la sostenibilidad del Sistema de Transporte, en términos de eficiencia económica, sostenibilidad financiera, eficacia en la prestación del servicio e impactos socioeconómicos esperados.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Diciembre 28 de 2012 Resolución No. 0012333

Atraso en cuotas de créditos incluidos en facturas de Servicios públicos, no obliga a empresa prestadora a suspender servicio

“Es claro que la empresa no podrá suspender el servicio público por el no pago de conceptos diferentes al directamente derivado del mismo. Respecto al valor de las cuotas derivadas de tales créditos deberá totalizarse de manera separada a la del respectivo servicio público de que se trate, de modo que quede claramente diferenciado cada concepto.

Las deudas originadas de obligaciones diferentes al pago de servicios públicos no generarán solidaridad respecto del propietario de inmueble, salvo que este así lo haya aceptado en forma expresa”. SuperServicios--Concepto--2012-N

Las ofertas que presenten los proponentes en los procesos de selección deben ser publicadas en el SECOP

El artículo 2.2.5. del Decreto 734 de 2012, en sus 19 numerales, enuncia los documentos que las entidades estatales deben obligatoriamente publicar en el SECOP. Sin embargo, en estos 19 numerales, no se enuncia expresamente que las ofertas que presenten los proponentes en los procesos de selección, deban ser publicadas.

No obstante, siendo las ofertas actos jurídicos asociados a los procesos de contratación, consideramos que para garantizar el principio de transparencia y publicidad, deberían ser publicadas en el SECOP, en cumplimiento de la prescripción general contenida en el artículo 2.2.5. del Decreto 734 de 2012.

Contraloría General Agosto 23 de 2012 Concepto Jurídico No. 57531

Consejo de Estado reitera diferencias entre prórroga y revalidación de licencias urbanísticas (12:35 p.m.)

La provisionalidad de las licencias urbanísticas se materializa en que estas son otorgadas por un lapso determinado, que cuando expira, finaliza con esta la vigencia del acto administrativo. Con lo anterior, el Consejo de Estado reiteró la diferencia entre su revalidación y su prórroga.

La primera implica volver a otorgar validez, lo que lleva a proferir un nuevo acto, momento en el que la administración puede examinar las condiciones de legalidad. Mientras tanto, la prórroga puede darse únicamente mientras el término por el que ha sido concedido el acto no ha expirado. Finalmente, el alto tribunal señaló que las revalidaciones incondicionales hechas por la administración a una licencia urbanística no la condicionan a seguir otorgándola, ya que no constituyen un elemento de confianza legítima en sus destinatarios, por la misma naturaleza provisional del acto administrativo en el que se concede la licencia urbanística.

(C.P. Jaime Orlando Santofimio). (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 41001233100019915927-01 (22779), 11/19/2012) Noticia generada en Ene. 03/13 (12:35 p.m.)

Jefe de presupuesto de un municipio no puede contratar con entidades públicas (2:15 p.m.)

El cargo de jefe de presupuesto de un municipio es un empleo público de libre nombramiento y remoción, por lo que a quien lo ocupa le está prohibido constitucionalmente contratar con entidades públicas, pues legalmente estaría en inhabilidad e incompatibilidad para celebrar dicha clase de contratos, precisó la Contraloría General de la República.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 127 de la Constitución Política, está prohibido para los servidores públicos celebrar por sí o por interpuesta persona o en representación de otro, contratos con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos. (Contraloría General de la República, Concepto EE63803, 9/18/2012)

Jueces no pueden definir a priori qué tipo de actos administrativos son demandables: Consejo de Estado (9:45 a.m.)

El Consejo de Estado concluyó que los jueces y magistrados de la jurisdicción contencioso administrativa no pueden, a priori, determinar reglas que indiquen qué tipo de actos administrativos son demandables y cuáles no. Mediante acción de tutela, la Sección Segunda del alto tribunal reiteró que, en cada caso, debe hacerse un análisis juicioso de las particularidades del requerimiento, en aras a determinar la procedibilidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Para reforzar su tesis, la providencia retrotrae lo señalado por el magistrado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren frente al Expediente 1712 del 2008, en el que señaló que aunque la generalidad de los casos obligue a demandar los actos que ordenan el retiro de funcionarios para alegar la vulneración de un derecho subjetivo, no siempre surge diáfano ese escenario.

La tutela determina que la colegiatura “ha reiterado sistemáticamente que no se pueden establecer, prima facie, reglas que establezcan qué actos administrativos deben demandarse” (M. P. Víctor Hernando Alvarado). (Consejo de Estado Sección Segunda, Sentencia 11001031500020120194900, 11/15/2012)

Solicitan inexecutable de varios apartes del Proyecto de Ley de Acceso a Información (9:22 a.m.)

(Procuraduría General de la Nación, Concepto 5482 (PE-036), 11/30/2012)

La Procuraduría atacó algunas disposiciones del Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública Nacional (P.L. 156/11 Senado – 228/12 Cámara), al sugerirle a la Corte Constitucional que declare inexecutable varios apartes de la misma, como el parágrafo 1º del artículo 5º, que reconoce como sujetos obligados a garantizar acceso a la información a los particulares únicamente si la utilizan para fines periodísticos o académicos.

En este caso, señala que la medida es desproporcionada, pues obligaría al resto de particulares a revelar el uso privado que les den a los datos. El organismo de control también solicitó la inconstitucionalidad de la expresión “salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la información”, contenida en el artículo 21, que se refiere a la prohibición de las entidades para negar la existencia de un documento o impedir su acceso; el artículo 28, parcial, sobre los recursos del solicitante de la información, y el artículo 30, que se refiere a la responsabilidad penal, civil y disciplinaria de funcionarios encargados de esta materia (M. P. María Victoria Calle).Noticia generada en Ene. 04/13 (9:22 a.m.)

Ante vacío normativo del Estatuto Tributario sobre notificación por edicto, se aplica el Código Contencioso Administrativo (8:30 a.m.)

Los actos administrativos en materia tributaria deben notificarse conforme con lo estipulado en los artículos 565 y 732 del Estatuto Tributario (ET). Particularmente, la resolución que resuelve el recurso de reconsideración debe notificarse personalmente o, en subsidio, por edicto.

En este punto, el Consejo de Estado señaló que para regular el vacío normativo existente en la legislación tributaria, en cuanto al término de fijación del edicto, resulta pertinente la aplicación del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo (CCA), que señala que debe hacerse por el término de 10 días. La anterior aplicación normativa corresponde a lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 1º del CCA, que dispone que los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por estas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas del código que sean compatibles

(C.P. William Giraldo Giraldo).Noticia generada en Dic. 13/12 (8:30 a.m.) (Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia 25000232700020070005201, 7/26/2012)

Se determinan los porcentajes de incremento de los avalúos catastrales para la vigencia de 2013

Los avalúos catastrales de los predios urbanos no formados y formados con vigencia de 1° de enero de 2012 y anteriores, se reajustarán a partir del 1° de enero de 2013 en tres punto cero por ciento (3,0%).

Los avalúos catastrales de los predios rurales no formados y formados con vigencia de 1° de enero de 2012 y anteriores, dedicados a actividades no agropecuarias se reajustarán a partir del 1° de enero de 2013 en tres punto cero por ciento (3,0%).
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -DNP Diciembre 28 de 2012 Decreto No. 2783

Los recursos de forzosa inversión para cultura tienen la finalidad de responder a financiar el gasto social en materia de cultura

Los recursos de forzosa inversión para cultura deben estar debidamente programados en el Plan Operativo Anual de Inversiones del municipio y en el respectivo presupuesto municipal, en la financiación de proyectos de acuerdo con las competencias señaladas por la ley.

Es importante tener en cuenta que los recursos tienen la finalidad de responder a financiar el gasto social en materia de cultura y que los proyectos deben estar orientados a satisfacer las necesidades de la comunidad en general, es decir, que es necesario evaluar el beneficio social y el impacto de cada proyecto tanto para la población urbana y rural del municipio, pues se trata de fortalecer las expresiones culturales que identifican a los habitantes del municipio.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Noviembre 16 de 2012 Concepto Jurídico No. 042294

Actuaciones administrativas se pueden comunicar en día no hábil (3:00 p.m.) (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Concepto 1535 (67993), 10/30/2012)

La comunicación de las actuaciones administrativas puede realizarse en día no hábil, a menos que la respectiva disposición establezca una regla distinta. Sin embargo, el conteo de los términos de traslado inicia el día hábil siguiente, si el plazo está concedido en días, y de fecha a fecha, si el plazo está concedido en meses o años, de acuerdo con lo previsto en el Código de Régimen Político y Municipal, precisó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

En todo caso, toda notificación solo podrá tenerse surtida cuando se cumpla con los presupuestos legales.

Tutela por una almohada: Inpec deberá entregar el artículo a un interno para garantizar la vida digna

Reclama el interno al INPEC una almohada para mejorar su vida carcelaria, explica que la dotación del artículo corresponde a uno de los elementos que hacen parte del mínimo vital, para que una persona privada de la libertad pueda tener un estilo de vida digna.

Señala la Sala que la Corte Constitucional ha manifestado de manera reiterada, que aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad en virtud de una condena o detención preventiva, si bien tienen suspendidos sus derechos a la libertad física y a la libertad de locomoción, conservan intactos otros derechos, como lo son la vida, la integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, por lo que ordena a la entidad accionada dar lo rogado.

Confirma. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Documento Disponible al Público en Diciembre de 2012. Temas: Dignidad Humana. Tratamiento de los Reclusos. Tratos Crueles. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Expediente 6801 23 31 000 2012 00501 de 2012

Mintransporte solicita registro y anotación de unos lotes ubicados en Santiago de Cali, Valle del Cauca

MinTransporte-Resolucion-2012-N0012322 2012/12/27 Diario Oficial-N048657 2012/12/28

Martes 8 de Enero de 2013

La facultad para invalidar concursos por parte de la comisión nacional del servicio civil tiene un límite temporal

La facultad conferida por el artículo 14 de la Ley 27 de 1992 para invalidar total o parcialmente un concurso, tiene como límite temporal, la producción de los actos administrativos de contenido particular y concreto de nombramiento en periodo de prueba, pues una vez elaborada la lista de elegibles, lo que procede es la exclusión de las personas que hubieren incurrido en la violación de las leyes y los reglamentos, o la revocatoria del nombramiento o cualquier otro acto administrativo relacionado con los infractores, ya que una vez el empleado ha sido nombrado y posesionado en el cargo respectivo, no

puede para él invalidarse el concurso, a menos que se hubiere demostrado su intervención y responsabilidad en las irregularidades que dan origen a la declaratoria de invalidez.

Consejo de Estado SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve
Actor: Municipio De Duitama, contra la CNSC Bogotá, D.C., Octubre 25 de 2012 Radicación No.: 11001-03-25-000-2007-00096-00(1811-07)

Los actos administrativos que crean, modifican o extinguen son demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa

Aquéllos actos de la administración que crean, modifican o extinguen tanto situaciones jurídicas generales como situaciones jurídicas particulares o concretas son actos administrativos pasibles de control de legalidad.

De igual forma, independientemente de la forma del instrumento o mecanismo que use la Administración (resoluciones, oficios, circulares, instrucciones, etc.) para materializar las decisiones que toma, si tales instrumentos o mecanismos contienen la voluntad de crear, modificar o extinguir la situación jurídica general o particular y concreta son actos administrativos pasibles de control judicial.

Consejo de Estado - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Barcenas Actor: Super 7 S.A., contra Bogotá Distrito Capital Bogotá D.C., Noviembre 1 de 2012 Radicación No.: 25000-23-27-000-2007-00251-01(17927)

Desplazados no están obligados a agotar vía gubernativa para atacar actos administrativos, recuerda la Corte (11:00 a.m.)

La Corte Constitucional recordó que los desplazados, por su situación de vulnerabilidad y el desconocimiento de sus propios derechos, no están obligados a agotar la vía gubernativa o la contenciosa para atacar actos administrativos, además, pueden hacerlo directamente, a través de la acción de tutela.

Atendiendo a lo dispuesto en la Sentencia T-177 del 2010, el alto tribunal sostuvo que no es proporcionado obligarlos a acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa con el fin de que soliciten la nulidad de los actos administrativos que niegan el subsidio de vivienda, "pues hacerlo niega el cúmulo de derechos que les han sido

vulnerados con el solo acto de desarraigo, y desconoce el carácter urgente que reviste para ellos adquirir una propiedad mediante la cual suplan la necesidad de vivienda”.

(M. P. Luís Ernesto Vargas Silva).Noticia generada en Ene. 04/13 (11:00 a.m.) (Corte Constitucional, Sentencia T-776, 10/9/2012)

Contraloría advierte a entidades públicas analizar decisiones sobre nombramientos y encargos para evitar carrusel de pensiones

“Contraloría General de la República advierte a las Entidades del Estado para que antes de tomar cualquier decisión sobre encargos y nombramientos, los funcionarios o grupos colegiados encargados de las nominaciones, selección, provisión y designación de personal realicen un análisis sobre el respaldo de cotizaciones y aportes que dicha pensión tiene y el impacto fiscal que tal decisión implica y de esta manera, adopten las medidas necesarias para evitar la toma de decisiones antieconómicas e ineficientes, en detrimento del patrimonio del Estado.

Todo lo anterior, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones fiscales y disciplinarias que de tales conductas se deriven por parte de las autoridades competentes”. Contraloría - Concepto

Corte estudiará demanda de inconstitucionalidad de parte del estatuto de anticorrupción: analizará si se viola el principio de doble instancia

Demanda de inconstitucionalidad Contra el artículo 59 incisos 2,6 de la ley 734 del 2002. Según la accionante lo demandado reguló los recursos y el trámite que se debe dar a los mismos al interior de la audiencia disciplinaria, lo cual a la luz de la Constitución Política son vulneratorios de los derechos fundamentales del debido proceso y la doble instancia.

Por otra parte señala que se concedieron facultades a la segunda instancia al momento de resolver la negativa de pruebas de ordenar, practicar y decretar pruebas de oficio, correr traslado para alegatos de conclusión y fallar el recurso de alzada, lo que a la luz de la Constitución es atentatorio contra ese derecho fundamental a tener una doble instancia imparcial.

Demandante: Johanna Andrea Hernández López. Fecha para comentario al público hasta el 11 de enero de 2013. Temas: Doble Instancia. Jurisdicción Disciplinaria. Actuaciones Administrativas.

En virtud de la entrada en vigencia de la ley 1437 de 2011 se actualiza el procedimiento de quejas y reclamos

Según memorando de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario, se requiere derogar el procedimiento denominado Trámite para dar respuesta a derechos de petición y solicitudes de información Versión 3.0, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, la cual señala que toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo, por tanto se deroga la versión 4.0 y se adopta la versión 5.0 del procedimiento de quejas y reclamos. Secretaría Distrital de Ambiente - Bogotá D.C. Resolución 1365 de 2012

Liberan recursos de las cuentas maestras para la salud (11:00 a.m.) (Congreso de la República, Ley 1608, 1/2/2013)

El Gobierno sancionó la ley que adopta medidas para mejorar el flujo de recursos y la liquidez del sector salud a través del uso de dineros que corresponden a saldos o excedentes de las denominadas cuentas maestras, aportes patronales y rentas cedidas.

En el caso de las cuentas maestras, dichos recursos podrán ser usados para el pago de servicios no POS, la cobertura del régimen subsidiado (dineros que irán directamente a las IPS) y para financiar programas de saneamiento financiero de empresas sociales del Estado categorizadas en riesgo medio y alto.

Por una sola vez, el Ministerio de Salud podrá disponer de recursos del Fosyga hasta por un monto de \$ 150.000 millones, para que las entidades territoriales saneen sus deudas con el régimen subsidiado, específicamente los municipios de categorías 4, 5 y 6 que tengan deudas reconocidas y no pagadas.

Viernes 11 de Enero de 2013

Se solicita a los alcaldes no suscribir convenios y acuerdos de integración intermunicipal con las empresas de transporte masivo

Se solicita respetuosamente a los alcaldes y a los gerentes de las Empresas de Transporte Masivo y Transporte Estratégico de las ciudades donde se desarrollan estos proyectos, abstenerse de suscribir convenios de cooperación comercial y de integración, hasta

tanto el Ministerio de Transporte defina el marco regulatorio para dicha integración física, operacional y tarifario.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Enero 9 de 2013 Comunicado de Prensa

Se adoptan los procedimientos y se establecen los requisitos para adelantar los trámites ante los organismos de tránsito

La presente resolución adopta los procedimientos y determina los requisitos necesarios para adelantar los trámites asociados al Registro Nacional Automotor, Registro Nacional de Remolques y Semirremolques y al Registro Nacional de Conductores ante los organismos de tránsito, por parte de los usuarios.

Por tanto ningún organismo de tránsito podrá, en la realización de los trámites aquí previstos, exigir requisitos diferentes a los establecidos en el presente acto administrativo. MINISTERIO DE TRANSPORTE - Diciembre 28 de 2012- Resolución No. 0012379

Santiago de Cali

Entidades competentes para determinar el valor comercial de los inmuebles objeto del procedimiento de enajenación voluntaria

A partir de la reforma introducida mediante la Ley 388 de 1997 y su decreto reglamentario, cualquiera de las entidades enlistadas sin ninguna clase de prelación entre ellas, tiene competencia para determinar el valor comercial de los inmuebles objeto del procedimiento de enajenación voluntaria.

Consejo de Estado - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera Ponente: Maria Claudia Rojas Lasso Actor: Heriberto Elías Bravo Tovar Bogotá, D.C., Noviembre 1 de 2012 Radicación: 76001233100019990087800

Requisitos para que se genere la responsabilidad patrimonial o extracontractual del estado por omisión de la administración pública

En los eventos de responsabilidad del Estado por omisión, para la prosperidad de las pretensiones de la demanda es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad

demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño.

Consejo de Estado - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA Consejero Ponente (E): Danilo Rojas Betancourth
Actor: Juan Ramón Molina Balbin, contra el Municipio de Medellín
Bogotá D.C., Agosto 29 de 2012 Radicación No.: 05001-23-31-000-1996-00409-01(25041)

Para la aplicación del principio non bis in idem deben concurrir tres identidades: de sujeto, de objeto y de bien jurídico

En materia jurídico penal, toda situación fáctica es declarada a partir de la valoración de distintos datos de índole objetiva con los que cuenta el funcionario y, en tal virtud, los parámetros jurídicos para apreciarla suelen ser imprescindibles. Pero extraer una nueva consecuencia jurídica a un hecho que ya fue apreciado desde similar perspectiva no representa, por sí solo, la violación del principio de no recaer en lo mismo.

De acuerdo con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para la aplicación del principio de no juzgar dos veces lo mismo deben concurrir tres identidades: de sujeto, de objeto y de bien jurídico.

Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente: Luís Guillermo Salazar Otero Actores: Saíd Alberto Rubiano Miranda Y Germán Gómez Orrego Bogotá, D. C., Octubre 31 de 2012 Casación No. 35159

Demandan de inconstitucional norma que ordena el retiro forzoso a los 65 años: afirman que los adultos mayores gozan inmensa capacidad laboral

Indica el demandante que el trabajo es una obligación social, y no se excluye a ninguna persona, el derecho al trabajo comprende a todos, hombres y mujeres mayores, de lo contrario, sería un contrasentido jurídico que no admite argumentaciones sutiles como las que presuntamente apoyarían la prohibición de conceder empleo a quienes tengan o superen los 65 años de edad, o que desempeñando un cargo sean retirados del servicio público por cumplirla.

Demandante: Hércules Cianci Sánchez. Fecha para comentario al público hasta el 11 de enero de 2013. Temas: Edad de Retiro

Excepciones a los gastos por publicidad por parte de las entidades públicas en virtud del estatuto anticorrupción

Si bien es cierto que la Ley 1474 de 2011 dispuso tal reducción del gasto por concepto de publicidad o difusión de campañas institucionales, esa medida tiene dos excepciones: de una parte, que se trate de Sociedades de Economía Mixta o empresas industriales y comerciales del Estado que compitan con el sector público o privado y la otra, que "existan motivos de interés público en salud", esto es, que el presupuesto se destine para publicidad o difusión de campañas institucionales de interés público en salud, tales como divulgar las disposiciones legales en materia de salud, prevención de enfermedades que puedan presentarse por ola invernal (Dengue, Cólera y Leptospirosis), prevención de rabia o vacunación.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Octubre 26 de 2012
Concepto jurídico N° 56451

Procedimiento para la liquidación de las empresas de servicios públicos del orden territorial

Para las empresas de servicios públicos del orden territorial no existe régimen legal propio, por lo que en el acto en que se ordene la liquidación deberá señalarse el régimen aplicable a la misma, al tenor de lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, el cual es aplicable a las entidades descentralizadas por servicios del orden territorial por remisión del parágrafo 2o del artículo 2 y parágrafo 1o del artículo 68 de Ley 489 de 1998.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Octubre 1 de 2012 Concepto Jurídico No. 660

Martes 15 de Enero de 2013

PROCESO DE LICITACIÓN O SELECCIÓN ABREVIADA

Cuantías en razón al nuevo salario mínimo para el año 2013.

Teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente fijado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2738 de 2012, la Editorial Contexto Jurídico atentamente le informa las cuantías para los procedimientos de Licitación Pública o Selección Abreviada para el año 2013, conforme la tabla que se indica a continuación:

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN CUANTÍA

LICITACIÓN PÚBLICA Y SELECCIÓN ABREVIADA

LITERAL B) ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1150 DE 2007

AÑO 2013

(SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL PARA EL AÑO 2013 = \$589.500)

<u>PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD</u>	<u>LICITACIÓN</u>	<u>SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</u>	<u>SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA</u>
<p>Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales.</p> <p>Presupuesto de la Entidad Pública superior o igual a: \$707.400.000.000.=</p>	<p>Mayor a 1.000 SMMLV</p> <p>Se debe realizar Licitación Pública cuando el proceso de selección tenga una cuantía superior a:</p> <p>\$589.500.000=</p>	<p>DE 100 SMMLV hasta 1.000 SMMLV</p> <p>Se debe realizar el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía, cuando el valor de la contratación se encuentre en el siguiente rango:</p> <p>Desde: \$58.950.000= Hasta: \$589.500.000=</p>	<p>hasta 100 SMMLV</p> <p>Hasta: \$58.950.000=</p>
<p>Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales.</p> <p>Presupuesto de la Entidad Pública superior o igual a: \$501.075.000.000.= e inferior a: \$707.400.000.000.=</p>	<p>Mayor a 850 SMMLV</p> <p>Se debe realizar Licitación Pública cuando el proceso de selección tenga una cuantía superior a:</p> <p>\$501.075.000=</p>	<p>DE 85 SMMLV hasta 850 SMMLV</p> <p>Se debe realizar el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía, cuando el valor de la contratación se encuentre en el siguiente rango:</p> <p>Desde: \$50.107.500= Hasta: \$501.075.000=</p>	<p>Hasta 85 SMMLV</p> <p>Hasta: \$50.107.500=</p>
<p>Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales</p>	<p>Mayor a 650 SMMLV</p>	<p>DE 65 SMMLV hasta a 650 SMMLV</p>	<p>hasta a 65 SMMLV</p>

mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales. Presupuesto de la Entidad Pública superior o igual a: \$235.800.000.000.= e inferior a: \$501.075.000.000.=	Se debe realizar Licitación Pública cuando el proceso de selección tenga una cuantía superior a: \$383.175.000=	Se debe realizar el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía, cuanto el valor de la contratación se encuentre en el siguiente rango: Desde: \$38.317.500= Hasta: \$383.175.000=	Hasta: \$38.317.500=
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales. Presupuesto de la Entidad superior o igual a: \$70.740.000.000.= e inferior a: \$235.800.000.000.=	Mayor a 450 SMMLV Se debe realizar Licitación Pública cuando el proceso de selección tenga una cuantía superior a: \$265.275.000=	DE 45 SMMLV hasta a 450 SMMLV Se debe realizar el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía, cuanto el valor de la contratación se encuentre en el siguiente rango: Desde: \$26.527.500= Hasta: \$265.275.000=	hasta a 45 SMMLV Hasta: \$26.527.500=
Para las entidades que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales. Presupuesto de la Entidad inferior a: \$70.740.000.000.=	Mayor a 280 SMMLV Se debe realizar Licitación Pública cuando el proceso de selección tenga una cuantía superior a: \$165.060.000=	DE 28 SMMLV hasta a 280 SMMLV Se debe realizar el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía, cuanto el valor de la contratación se encuentre en el siguiente rango:	hasta a 28 SMMLV Hasta: \$16.506.000=

		Desde: \$16.506.000= Hasta: \$165.060.000=	
--	--	-----------------------------------------------------	--

La administración puede destruir el contrato e inhabilitar al contratista de celebrar otros negocios con el Estado

Para la Sala, "la caducidad como prerrogativa exorbitante se diferencia en el estatuto de contratación estatal por ser también una manifestación de la potestad sancionadora de la Administración, circunstancia que la ubica en un plano diferente: aun cuando es un instrumento jurídico que se justifica en la responsabilidad de la administración en el control y vigilancia de la ejecución del contrato, se constituye en una herramienta extraordinaria, lo cual quiere señalar que responde a comportamientos que requieren de un análisis en el que se impute responsabilidad al contratista y que denoten tal gravedad que puedan llevar a la paralización del objeto contratado". Consejo de Estado – Caducidad del Contrato Estatal

Por ser un gravamen real sobre inmuebles, la contribución de valorización debe cobrarse aplicando el ET Nacional

La Sala indica, previo a abordar los términos del recurso, que 'el cobro coactivo de obligaciones tributarias viene a ser una subespecie de la jurisdicción coactiva de naturaleza administrativa, la que a su vez resulta ser una fórmula especial del juicio ejecutivo previsto en las normas generales del procedimiento civil. Y desde la perspectiva también administrativa, dicho cobro coactivo corresponde a la autotutela ejecutiva de la autoridad, que le permite hacer exigibles las obligaciones fiscales por sí misma, sin necesidad de acudir a la rama judicial del Estado.

Sin embargo, en materia tributaria, por disponerlo así el artículo 823 y siguientes del Estatuto Tributario, la administración tributaria puede cobrar los créditos fiscales por sí misma y sin necesidad de recurrir a las autoridades judiciales, siguiendo el procedimiento especial establecido en dichas disposiciones. Este procedimiento especial no ha quedado limitado a las causas tributarias de las obligaciones impositivas a que se refiere el Estatuto Tributario, que son los impuestos nacionales administrados por la Dirección de Impuestos Nacionales, DIAN, sino que ha sido extendido a otros órdenes por disposición del propio legislador. (...)'.

'Por tanto, como tributo del orden distrital, y por mandato del artículo 162 del Decreto Ley 1421 de 1993, las normas del Estatuto Tributario Nacional sobre procedimiento de cobro deben ser aplicadas por las entidades distritales, de conformidad con la naturaleza y estructura funcional de sus impuestos.

Finalmente, el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 tiene establecido que las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas, y que en virtud de éstas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y que, para estos efectos, deben aplicar el procedimiento del Estatuto Tributario Nacional'. Consejo de Estado.

FUSIÓN DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO

No otorga fuero alguno de estabilidad el ocupar un cargo de carrera administrativa sin acceder al sistema de méritos

"En cuanto a la pretensión de reintegro a la planta de personal del hospital, es preciso reiterar que el demandante no pertenecía a la carrera administrativa, razón por la cual no ostentaba fuero de estabilidad alguno que obligara a la administración a cumplir con ofrecerle las prerrogativas (reincorporación e indemnización) que consagra la Ley 443 de 1998 y los Decretos 1568 y 1572 de 1998, para aquellos que sí pertenecen a ella.

De esta manera, la administración podía retirarlo del servicio como consecuencia de la supresión de la planta de personal que hizo el Acuerdo 005 de 2000, sin que estuviera obligada a reincorporarlo o indemnizarlo, pues no tenía derechos adquiridos de carrera administrativa y no estaba sujeta al procedimiento de retiro propio de esta clase de servidores, sino de un empleado en provisionalidad".

"Frente a este tema ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en manifestar que ocupar un cargo de carrera administrativa al cual se accedió en forma ordinaria y no mediante el sistema especial de méritos, no le otorga a quien lo ocupa fuero alguno de estabilidad.

Las prerrogativas que confiere este sistema de méritos se predicen del funcionario que concursó, superó y fue inscrito en el escalafón de la misma, mas no de quienes se vincularon por decisión discrecional del nominador, pues mal pueden pretender que esta vinculación precaria les confiera derechos de permanencia". Consejo de Estado.

Responsabilidad de prestadores del servicio de energía frente a daños de electrodomésticos

“Es importante señalar que la responsabilidad por los daños que se produzcan en bienes muebles eléctricos de un usuario, no siempre está a cargo de la prestadora, por lo que se debe analizar cada caso en concreto y de conformidad con las pruebas existentes determinar quién ha incumplido la normativa y quién resulta responsable de haber omitido el deber de cuidado, además de establecer si existieron circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor.

Finalmente, en lo referente a la responsabilidad civil contractual, debe señalarse en todo caso que el daño resulta indemnizable cuando en forma ilícita es causado por alguien diferente a la víctima para lo cual requiere del lleno de algunos requisitos, entre ellos que el perjuicio debe ser directo, es decir, que debe existir nexo causal entre quien produce el hecho dañoso y el daño mismo”. Concepto SuperServicios 0000581 2012/09/05

Las entidades territoriales pueden contratar con empresas privadas el ejercicio de auditorías internas por un término no superior a tres años

De conformidad con el artículo 269 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 87 de 1993, las entidades públicas (incluyendo los entes territoriales) pueden contratar con empresas privadas colombianas de reconocida capacidad y experiencia, el ejercicio de auditorías internas por un término no superior a tres años.

La selección de la empresa contratista debe efectuarse mediante concurso de méritos. Contraloría General Septiembre 18 de 2012 Concepto Jurídico No. 63791

Jueves 17 de Enero de 2013

Se reglamentará el sistema de compras y contratación pública y se deroga el decreto 734 de 2012

Los actos, decisiones y actuaciones de la administración en el Proceso de Contratación y los contratos que celebren las entidades públicas deben estar sujetos a la Constitución Política, a la Ley y al presente decreto.

El presente decreto deroga el Decreto 734 de 2012 excepto las siguientes disposiciones: a) los artículos 3.8.1.1 al 3.8.3.20 relativos

a la enajenación de bienes que forman parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado -FRISCO-; y (b) los artículos 5.4.1. al 5.4.4. referentes a las garantías en la contratación de tecnologías satelitales. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -DNP - Proyecto de Decreto

Presentan disposiciones de decreto reglamentario del régimen de insolvencia para personas naturales no comerciales

“El Régimen de Insolvencia beneficiará a todas aquellas personas de buena fe quienes por alguna situación de fuerza mayor, enfermedad, por alguna crisis familiar, por algo que se salió de sus manos no pudo cumplir con los pagos que tenía que hacer. Esa persona que hoy está en las bases de datos, que tiene que acudir al préstamo gota a gota logrará con este régimen reactivar su actividad financiera y comercial previo un acuerdo con sus acreedores para que le den un plazo para pagar sus deudas”, indicó la Ministra Correa.

“Para acceder al procedimiento recientemente reglamentado, el deudor que tenga imposibilidad de pago deberá acercarse bien a una Notaría o bien a un Centro de Conciliación que cuente con el aval del Ministerio de Justicia y del Derecho para el efecto (consultar en la página web www.conciliación.gov.co). El deudor presenta una solicitud en la que explica qué bienes y qué deudas tiene, cuál es la causa de su crisis y una propuesta de acuerdo para salir de la misma. Mientras el deudor se encuentre adelantando un procedimiento de esta naturaleza, se ordena la reconexión de los servicios públicos domiciliarios en caso de que le hayan sido suspendidos”. MinJusticia

A los municipios les está prohibido gravar con ICA los ingresos que generan las EPS e IPS públicas y privadas

“Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se reorganizó nuevamente el sector salud, bajo el nombre de “Sistema de Seguridad Social en Salud” en el cual, conforme a su artículo 156, concurren en su conformación, entre otros organismos, el Gobierno Nacional, el Fosyga, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), que son “entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias, organizadas para la prestación de los servicios de salud a los afiliados del sistema general de seguridad social en salud, dentro de las promotoras de salud o fuera de ellas [...]”.

De la normativa referenciada, se concluye que a los municipios y al Distrito Capital les está prohibido gravar con el impuesto de industria

y comercio a los "hospitales adscritos y vinculados al sistema nacional de salud", expresión que comprende y debe entenderse, como aquellas entidades e instituciones promotoras y prestadoras de servicios de salud, de naturaleza pública y privada, que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud".

Consejo de Estado CE-SEC4-EXP2012-N18431 (01036-01) Sentencia 2012/08/16

Si no es con original o copia auténtica, no hay manera de reclamar por un contrato aparentemente incumplido

Se trata de denuncia por aparente incumplimiento del municipio de Ibagué a contratista para la instalación de 14 computadores. La Sala confirmó la sentencia de instancia que condenó al municipio a pagar algo más de \$300.000, pero solo por el hecho de que el demandante es el único apelante. La Sala actualizó la cifra, pero dejó claro que no obra prueba que demuestre la existencia del contrato.

"La ausencia del escrito, en original o en copia auténtica, única prueba solemne admitida por la ley en relación con la existencia misma del contrato, resulta relevante para el caso que se estudia. Así se desprende con claridad del contenido de los artículos 39 y 41 de la ley 80 de 1993". Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2012-N18207 (01405-01) Sentencia 2012/03/07

Crean la Comisión Nacional Digital y de Información Estatal (10:38 a.m.)

(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 0032, 1/14/2013)

La Comisión Nacional Digital y de Información Estatal será la encargada de coordinar la ejecución de funciones y servicios relacionados con el manejo de la información pública, el uso de infraestructura tecnológica de información para la interacción con los ciudadanos y el uso efectivo de la información en el Estado colombiano.

Así mismo, emitirá los lineamientos rectores del grupo de respuesta a emergencias cibernéticas del Ministerio de Defensa Nacional y asesorará al Gobierno en materia de políticas para el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Noticia generada en Ene. 15/13 (10:38 a.m.)

Las facturas de servicios públicos domiciliarios prestan mérito ejecutivo y pueden ser cobradas ejecutivamente

Los asuntos propios de los Servicios Públicos Domiciliarios se encuentran regulados por normas de carácter especial, como las contenidas en la Ley 142 de 1994, las cuales tienen prevalencia sobre otras leyes que regulen dichos servicios, tal como lo señala el artículo 186 de la aludida Ley.

En ese sentido es de resaltar que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 130 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 18 del Decreto 689 de 2001, las facturas de servicios públicos domiciliarios prestan mérito ejecutivo y pueden ser cobradas ejecutivamente.

Consejo de Estado SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera Ponente: Maria Elizabeth García González Actor: Sociedad de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, contra la Direccion Distrital de Liquidaciones antes Superintendencia Distrital de Liquidaciones Bogotá, D.C., Agosto 23 de 2012 Radicación No.: 08001-23-31-000-2005-02495-01

La falta disciplinaria se enmarca en la preservación de reglas de conducta que debe seguir el servidor público

La potestad disciplinaria tiene por finalidad sancionar las actuaciones de los funcionarios que conlleven el incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones y la incursión en prohibiciones; por ende, la falta disciplinaria se enmarca en la preservación de reglas de conducta que debe seguir el servidor público y que guardan relación con los principios que guían la función administrativa, con lo que se busca, en suma, la protección de la función pública y sancionar el menoscabo de los bienes jurídicos tutelados por las actuaciones irregulares de sus funcionarios que se realicen a título de dolo o culpa; es decir, es de la esencia de la falta disciplinaria, que el comportamiento irregular del funcionario que se le atribuye subjetivamente se encuentre debidamente probado, bien por causa correlativa de la omisión del deber que le correspondía o por la extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren Actor: Candida Alicia Urrego Suescun, contra el Ministerio de Defensa - Policía Nacional Bogotá, D.C., Junio 28 de 2012 Radicación No.: 05001-23-31-000-2005-00990-01(1692-10)

No existe la posibilidad de que los concejales sean exonerados de efectuar los aportes en pensiones

No existe la posibilidad de que los concejales sean exonerados de efectuar los aportes en pensiones, ya que el ente territorial está en la obligación de descontar de sus honorarios el valor respectivo, salvo en aquellos casos en los que el concejal allegue la suma requerida para el efecto.

Sobre este aspecto, el artículo 4º de la Ley 1368 de 2009, el artículo 1º del Decreto 4944 de 2009 y el artículo 23 de la Ley 1551 de 2012 señalan que los concejales pertenecientes a municipios de 43, 53 y 63 categoría, que no tengan otra fuente de ingreso adicional, diferente al percibido por concepto de honorarios, serán beneficiarios del Fondo de Solidaridad Pensional, creado por La ley 100 de 1993. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Octubre 31 de 2012 Concepto jurídico N° 72271

El empleador no está obligado a otorgar dotación a los trabajadores que no desarrollen ningún tipo de actividad laboral

El empleado tiene derecho a la dotación, no solo al cumplir los tres meses al servicio del empleador y encontrarse con su salario dentro de un rango inferior de 2 S.M.M.L.V, si no también, por el avance jurisprudencial, el trabajador tiene que desarrollar actividades laborales para que sea objeto de la entrega de la dotación; por tanto el empleador no esta obligado al otorgamiento de la dotación de vestido y calzado de labor a los trabajadores que no desarrollen ningún tipo de actividad laboral.

MINISTERIO DEL TRABAJO Octubre 18 de 2012 Concepto Jurídico No. 159044

Viernes 18 de Enero de 2013

Término y modalidades de liquidación del contrato estatal

La liquidación de un contrato estatal se debe practicar a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, mediante la celebración de un negocio jurídico extintivo entre las partes (si es de mutuo acuerdo) o un acto administrativo expedido por la entidad contratante (si es unilateral).

(...) La liquidación puede ser: (i) bilateral o por mutuo acuerdo entre las partes dentro del plazo contractual o el legal (4 meses); o unilateral, por acto administrativo que se profiere cuando: a) no se presenta el contratista a la liquidación bilateral, b) no se logra la liquidación bilateral o c) se logra parcialmente y (iii) judicial, cuando se pide por esta vía a través de la acción de controversias contractuales y se demanda en tiempo, porque a) no se ha producido la liquidación; o b) respecto de puntos no liquidados.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente (E): Danilo Rojas Betancourt Actor: Edith Rodríguez de Villa, contra el Instituto Tecnológico de Antioquia Bogotá D.C., Agosto 29 de 2012 Radicación No.: 05001-23-25-000-1994-01059-01(21315)

Ratifican inconstitucionalidad de proyecto que concedía pensión gracia a maestros oficiales - 17 de Enero 10:13 AM

La Corte Constitucional confirmó que el Proyecto de Ley 114/09S-296/10C, que pretendía concederles a los maestros del orden nacional el derecho a acceder a la pensión gracia, es inexecutable.

La Sala Plena del alto tribunal negó las pretensiones de nulidad invocadas contra la Sentencia C-741 del 2012, mediante la cual concluyó que las objeciones presidenciales formuladas a la iniciativa eran procedentes.

“Esta solicitud de nulidad resulta totalmente inconsecuente, pues en caso de ser acogida, esa decisión no tendría la capacidad de solucionar la situación que se buscaría resolver, sino por el contrario la agravaría”, señala el auto, al referirse a los supuestos plazos excesivos que se impuso la Corte para fallar.

El alto tribunal rechazó los señalamientos del accionante sobre la supuesta inobservancia y falta de análisis de las intervenciones ciudadanas. Además, indicó que el artículo 280 del Código General del Proceso se refiere a la brevedad y forma concisa en las que deben expresarse los planteamientos de la parte motiva de las sentencias, lo que impide poner de presente el contenido de todas las intervenciones.

La Corte tampoco accedió a los alegatos del actor respecto al supuesto vicio de nulidad que suponía no referirse a la solicitud de convocar a audiencias públicas antes de atender el examen final de constitucionalidad, por ser potestativo del alto tribunal pronunciarse o no.

(Corte Constitucional, Auto 296 (C-741/12), dic. 12/12, M. P. Nilson Pinilla)

Para el manejo de los anticipos de contratos adjudicados mediante licitación pública se debe constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable

Para el manejo de los anticipos que se entreguen en los contratos adjudicados mediante licitación pública o en los contratos de salud de mayor cuantía, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable; y para el manejo de los anticipos que se entreguen en los demás contratos estatales, el contratista deberá abrir una "cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito", con la condición de que "los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados, pertenecerán al Tesoro".

Contraloría General Septiembre 20 de 2012 Concepto Jurídico No. 64611

Los concejos municipales no están autorizados para crear la tasa de uso de semaforización

Ni la Constitución, ni la Ley, autorizan a los Concejos Municipales para crear la tasa de uso de semaforización. Por el contrario, solo se le otorgaron facultades a estas corporaciones para fijar los elementos del impuesto de alumbrado público, y para organizar su cobro y destinación. Por lo tanto, como el servicio de semaforización forma parte del servicio de alumbrado público, se infiere, como ya lo ha dicho esta Corporación, que los Concejos Municipales no están legalmente facultados para crear un tributo denominado "Tasa de Semaforización" y mucho menos para fijar tarifas por este concepto, ya que la Ley 97 ibídem creó el impuesto de alumbrado público, que, se reitera, incluye dentro de su concepto la prestación del servicio de semaforización.

Consejo de Estado - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas Actor: Abraham Enrique Quiñónez González, contra el Municipio de Montería Córdoba Bogotá D.C., Julio 5 de 2012 Radicación No.: 23001-23-31-000-2006-00369-01(17873)

Funcionario en régimen de transición y con estatus pensional consolidado puede seguir en el cargo

18 de Enero 9:46 AM

El empleado público tiene derecho a permanecer en el cargo hasta la edad de retiro forzoso, aunque el estatus pensional se haya consolidado en vigencia de la Ley 797 del 2003, si está cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Para el Consejo de Estado, de la lectura del parágrafo 3° del artículo 9° de la Ley 797, se concluye que la causal de retiro por cumplimiento de la edad está determinada por el término "podrá", es decir, que constituye una opción y, a la vez, una potestad radicada en cabeza del empleador.

Por lo tanto, su ejercicio no tiene un plazo o término específico, y el empleado al que se le ha reconocido la pensión puede permanecer en el cargo, hasta que el empleador disponga su retiro.

El consejero Gerardo Arenas Monsalve salvó su voto, refiriéndose entre otros puntos, al artículo 9° de La Ley 797, que incluyó una nueva causal de retiro laboral.

Según Arenas, esta causal es de aplicación inmediata, pero debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-1037 del 2003, declaró la exequibilidad condicionada de la norma, en el entendido de que se haya notificado debidamente la inclusión en la nómina de pensionados, para que proceda la terminación del vínculo laboral.

(Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia 15001233100020080023201 (03622011), sep. 6/12, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila)

Obligación alimentaria de padres de familia no puede tornarse indefinida 18 de Enero 10:39 AM

La Corte Constitucional indicó que la obligación alimentaria que tienen los padres con sus hijos estudiantes mayores de 25 años concluye cuando terminan sus estudios.

Sin embargo, el operador judicial debe analizar las circunstancias especiales del caso, para que ese beneficio no se torne indefinido por la desidia de los hijos, advirtió.

La Corte recordó que la jurisprudencia estableció la edad de 25 años como término razonable para formarse en una profesión u oficio y obtener independencia económica.

En el caso analizado, le ordenó al Juzgado 11 de Familia de Medellín decidir nuevamente sobre la exoneración de alimentos solicitada por

un padre frente a su hijo de 26 años, que no era estudiante, pues ya había culminado una carrera tecnológica, y no padecía limitaciones físicas ni mentales que le impidieran trabajar.

Aunque el juzgado de instancia negó la petición, porque el joven estaba desempleado, el alto tribunal determinó que su situación de estudiante no se podía prolongar indefinidamente para continuar recibiendo la cuota alimentaria.

El magistrado Nilson Pinilla aclaró el voto. (Corte Constitucional, Sentencia T-854, oct. 24/12, M. P. Jorge Iván Palacio)

Lunes 21 de Enero de 2013

Acción de enriquecimiento sin justa causa - actio de in rem verso. Los contratos estatales verbales son inexistentes.

El Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en relación con el tema de la actio in rem verso o acción de enriquecimiento sin justa causa, cuando las Entidades Públicas son demandadas por el hecho de haber ejecutado contratos verbales y/o haber realizado labores o recibido bienes o servicios omitiéndose el cumplimiento de las solemnidades establecidas por la Ley.

En la providencia se advirtió que los contratos estatales son solemnes puesto que su perfeccionamiento exige la solemnidad del escrito, excepción hecha de ciertos eventos de urgencia manifiesta en que el contrato se torna consensual ante la imposibilidad de cumplir con la exigencia del escrito.

En este sentido, se afirma en la Sentencia que todos los que pretendan intervenir en la celebración de un contrato estatal, tienen el deber de acatar la exigencia legal del escrito para perfeccionar un negocio jurídico con el Estado, sin que sea admisible la ignorancia como excusa para su inobservancia.

Para el Alto Tribunal, la actio de in rem verso sería procedente en los siguientes casos:

a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo.

b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación.

c) En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993.

El pronunciamiento contiene salvamento de voto, en el que se sostiene que la decisión convierte la figura del enriquecimiento sin justa causa en una figura inoperante, realizándose un recuento de la figura, su evolución histórica y su recepción en los sistemas jurídicos más representativos.

Criterios para calificar una falta laboral como un hecho grave para efectos del despido con justa causa

La conexidad entre el hecho grave y los perjuicios no puede erigirse en predicado universal. Lo que es grave no siempre produce perjuicios, y en cambio lo que es leve o insignificante a veces puede producirlos.

La gravedad - cuyo neto sentido etimológico es peso - y que resulta de tan difícil medida para el juzgador, suele ser, como en el caso del acuerdo 8º del art. 62 del C.S. del T., el énfasis y encarecimiento con el cual el legislador ha querido rodear los hechos generadores de efectos jurídicos: la mala conducta del trabajador como causante de la terminación del contrato, etc., sin que ello necesariamente envuelva que tal hecho (mala conducta) haya producido perjuicios al patrono.

Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrado Ponente: Carlos Ernesto Molina Monsalve Actor: Gustavo de Los Ríos Lizaralde, contra BAVARIA S.A. Bogotá D. C., Agosto 14 de 2012 Radicación N° 39518

Quien ocupa un cargo de carrera administrativa al cual se accedió en forma ordinaria y no mediante concurso de méritos no goza de fuero alguno de estabilidad

Ocupar un cargo de carrera administrativa al cual se accedió en forma ordinaria y no mediante el sistema especial de méritos, no le otorga a quien lo ocupa fuero alguno de estabilidad. Las prerrogativas que confiere este sistema de méritos se predicán del funcionario que concursó, superó y fue inscrito en el escalafón de la misma, mas no de quienes se vincularon por decisión discrecional del nominador, pues mal pueden pretender que esta vinculación precaria les confiera derechos de permanencia.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA Consejero Ponente: Luís Rafael Vergara Quintero Actor: Renato Antonio Guzmán Moreno, contra el Hospital Centro Oriente E.S.E Bogotá D.C., Julio 26 de 2012 Radicación No.: 25000-23-25-000-2001-01534-01(0379-08)

Cónyuges de gobernadores o alcaldes no pueden ser contratistas del respectivo municipio: Mintrabajo

El artículo 1 de la ley 1296 señala que "los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil no podrán ser contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente". MinTrabajo—Concepto

Congreso de la Republica- PL-2012-N202C-Comisión Primera-TO (CODIGO POLICIA) 2012/11/02

Los ministros de Defensa, Juan Carlos Pinzón y el del Interior Fernando Carrillo, radicaron en la Cámara de Representantes (el pasado mes de diciembre) un proyecto para actualizar y adecuar el actual Código Nacional de Policía. El nuevo Código tendría como objetivos específicos los siguientes: "Servir de base para los comportamientos en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público. Promover el respeto y el ejercicio responsable de los derechos. Promover el uso de mecanismos alternativos, o comunitarios, para la

conciliación y solución pacífica de desacuerdos y conflictos entre particulares”.

“Definir comportamientos, medidas, medios y procedimiento de policía; establecer la competencia de las autoridades de policía en la Nación, en los departamentos, en los distritos y municipios, con observancia del principio de autonomía territorial, y establecer un procedimiento idóneo, inmediato, expedito y eficaz para la atención oportuna de los comportamientos relacionados con la convivencia en el territorio nacional”.

Gobierno Nacional radicó proyecto para expedir el nuevo Código Nacional de Policía Publicado por Artículo20 en: 2013/01/14

Parámetros para que proceda la acción de tutela para amparar el derecho al agua

Una acción de tutela procede para amparar el derecho al agua, cuando (i) se presenta con la finalidad de garantizar a una persona o comunidad el acceso a agua para su consumo humano, o (ii) cuando se interpone con fundamento en que una empresa de servicios públicos domiciliarios suspendió total o parcialmente la prestación del servicio, y esa actuación afectó los derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional.

Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa - Actor: Alberto de Jesús Quintero Espinosa contra EPM Empresas Públicas de Medellín Bogotá, D.C., Septiembre 26 de 2012 Sentencia T-749/12

Plan de acción - Planes generales de compras deben ser publicados antes del 31 de enero de 2013

En virtud de lo establecido en el Estatuto Anticorrupción, todas las Entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. El Plan de Acción anteriormente mencionado, deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior.

Así mismo, en virtud del mismo estatuto, todas las entidades del orden nacional, departamental, municipal y distrital deberán publicar en sus respectivas páginas web cada proyecto de inversión, ordenado según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según el

caso; señalándose que las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, están exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión.

De otra parte, las entidades deberán elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción. Dicha estrategia necesariamente debe contemplar, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Finalmente, es preciso advertir que el incumplimiento de los deberes anteriormente mencionados por parte de los servidores públicos, se constituye como falta disciplinaria grave.

Las disposiciones del Estatuto Anticorrupción que sustentan lo anterior, corresponde a las siguientes:

“CAPÍTULO SEXTO

POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y PEDAGÓGICAS.

ARTÍCULO 73. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.

Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

ARTÍCULO 74. PLAN DE ACCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la

distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior.

Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación.

Parágrafo. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión.

ARTÍCULO 75. POLÍTICA ANTITRÁMITES. Para la creación de un nuevo trámite que afecte a los ciudadanos en las entidades del orden nacional, éstas deberán elaborar un documento donde se justifique la creación del respectivo trámite. Dicho documento deberá ser remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública que en un lapso de treinta (30) días deberá conceptuar sobre la necesidad del mismo. En caso de que dicho concepto sea negativo la entidad se abstendrá de ponerlo en funcionamiento.

Parágrafo 1. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que en el término de seis meses, contados a partir de la fecha de la publicación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública.

Parágrafo 2. Las facultades extraordinarias atribuidas en el presente artículo no serán aplicables respecto de trámites relacionados con licencias ambientales.

ARTÍCULO 76. OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS. En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.

La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios.

Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público.

La oficina de quejas, sugerencias y reclamos será la encargada de conocer dichas quejas para realizar la investigación correspondiente en coordinación con el operador disciplinario interno, con el fin de iniciar las investigaciones a que hubiere lugar.

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a la presente norma.

Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un proceso de gestión de denuncias, quejas y reclamos, se podrán validar sus características contra los estándares exigidos por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

ARTÍCULO 77. PUBLICACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN. Sin perjuicio de lo ordenado en los artículos 27 y 49 de la Ley 152 de 1994 y como mecanismo de mayor transparencia en la contratación pública, todas las entidades del orden nacional, departamental, municipal y distrital deberán publicar en sus respectivas páginas web cada proyecto de inversión, ordenado según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según el caso.

Parágrafo. Las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión.

ARTÍCULO 78. DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Modifíquese el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, que quedará así:

Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

Entre otras podrán realizar las siguientes acciones:

- a. Convocar a audiencias públicas.
- b. Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana.
- c. Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto del correcto funcionamiento de la administración pública.
- d. Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para representar a los usuarios y ciudadanos.
- e. Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan.
- f. Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa.

En todo caso, las entidades señaladas en este artículo tendrán que rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional, los cuales serán formulados por la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Política de rendición de cuentas creada por el CONPES 3654 de 2010.

ARTÍCULO 79. PEDAGOGÍA DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS. Los establecimientos educativos de educación básica y media incluirán en su Proyecto Educativo Institucional, según lo consideren pertinente, estrategias para el desarrollo de competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación y la responsabilidad democrática, y la identidad y valoración de la diferencia, lo cual deberá verse reflejado en actividades destinadas a todos los miembros de la comunidad educativa. Específicamente, desde el ámbito de participación se orientará hacia la construcción de una cultura de la legalidad y del cuidado de los bienes comunes.

Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación promoverán programas de formación docente para el desarrollo de las competencias ciudadanas

ARTÍCULO 80. DIVULGACIÓN DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN. Los proveedores de los Servicios de Radiodifusión Sonora de carácter público o comunitario deberán prestar apoyo gratuito al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en divulgación de proyectos y estrategias de comunicación social, que dinamicen los mecanismos de integración social y comunitaria, así como a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia,

Transparencia y Lucha contra la Corrupción y otras entidades de la Rama Ejecutiva con un mínimo de 15 minutos diarios de emisión a cada entidad, para divulgar estrategias de lucha contra la corrupción y proteger y promover los derechos fundamentales de los Colombianos.

De la misma manera los operadores públicos de sistemas de televisión, deberán prestar apoyo en los mismos términos y con el mismo objetivo, en un tiempo no inferior a 30 minutos efectivos de emisión en cada semana.

ARTÍCULO 81. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES. El incumplimiento de la implementación de las políticas institucionales y pedagógicas contenidas en el presente capítulo, por parte de los servidores públicos encargados se constituirá como falta disciplinaria grave”.

Realizó: Claudia Salas Martínez
Profesional Universitario – Dirección Jurídica
Alcaldía de Santiago de Cali
Procedimiento Difusión de Información Jurídica
57-2 8896744
Claudia.salas@cali.gov.co